

Salvador de la Plaza

POR UNA

REFORMA AGRARIA

DEMOCRATICA Y POPULAR

Conferencia dictada por  
Salvador de la Plaza en  
el local de la Federa-  
ción de Trabajadores del  
Distrito Federal y E.M.,  
el día 27 de agosto de  
1.948.

Editada por la Comi-  
sión de Agitación y  
Propaganda del P.R.P.(c)

Precio: Bs. 1,00

burguesía industrial así como la comercial, deberían estar empujadas en una transformación radical de la estructura agraria, capaz de crear y facilitar el desarrollo de un mercado interior en donde colocar sus artículos, pero sus intereses se encuentran tan íntimamente enclufados con los de los latifundistas y mediatizados por los trusts imperialistas, que cuando más si algunos de sus voceros han aceptado en teoría la incorporación del campesinado a la vida productiva, en la práctica han terminado por oponerse a las dotaciones y traicionar al movimiento democrático-burgués, como lo han puesto de manifiesto los dirigentes acción-democratistas al pasarse descaradamente al campo de la contrarrevolución.

¿En qué ha consistido esa traición? Hagamos un poco de historia. En enero de 1944 fué designada por el Ejecutivo Nacional la Comisión que debía elaborar el proyecto de Ley Agraria, proyecto que introducido al Congreso en sus sesiones de 1945, fué sancionado sin sustanciales modificaciones en setiembre 10 de ese año.

Los proyectistas, interpretando los intereses de las masas venezolanas, acogiendo la tradicional aspiración del campesinado, respondían esta vez en todo el país por las fuerzas democráticas consiguientes, establecieron como propósito de la Ley:

E...la transformación de la estructura agraria del país mediante la adecuada incorporación del campesino al proceso de la producción nacional, el fomento de la producción agropecuaria, la distribución equitativa de la tierra, la mejor organización y extensión del crédito agrícola y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población campesina. Estos propósitos se llevarán a cabo dentro de los límites de esta Ley y en forma que no perjudique a los propietarios que explotan sus fincas en las condiciones indicadas en el artículo 35"

Y para la adecuada incorporación del campesino al proceso de la producción, en el artículo 2/ establecieron:

"Esta Ley regula el derecho de todo individuo o GRUPO de población apto para trabajos agrícolas o pecuarios, que carezcan de tierras o las posean en extensión que no les permita gozar de los beneficios previstos en la propia Ley, a que SE LES DOTE DE TIERRA ECONOMICAMENTE EXPLOTABLE. El Instituto Nacional Agrario, en la medida de sus DISPONIBILIDADES, atenderá en forma progresiva las peticiones que le sean formuladas".

Si examinamos estos dos artículos, encontraremos que tanto los proyectistas como luego el Congreso de 1945, sin proponérselo conscientemente quien sabe, para el caso no nos interesan sus intenciones íntimas, al establecer como propósito de la Ley la transformación de la estructura agraria del país mediante la incorporación del campesino al proceso de la producción DOTÁNDOLO de tierra en propiedad, sentaban las bases para la emancipación del campesinado de la explotación de los señores de tierra, fuera esa explotación por medio del arrendamiento, medianería o trabajo asalariado. Esos artículos hacían de esa Ley una legislación de defensa del hombre campesino. La incorporación del campesino dotado de tierra en propiedad, crearía nuevas relaciones de producción en el campo y por consiguiente, una nueva villa cuya orientación hacia un fortalecimiento del régimen capitalista o hacia formas de producción colectivas, dependería de las fuerzas revolucionarias, de los campesinos mismos y de los implementos y máquinas de trabajo que el Estado pusiera a su disposición.



En su articulado la Ley reglamentaba la forma de llevar a la práctica el propósito expresado y el derecho a la dotación creado. La Ley establecía que las dotaciones a los grupos campesinos se harían en los lugares mismos de asiento de los grupos de población, con las tierras adscritas al patrimonio del Instituto o las que éste adquiriera por compra o expropiación mediante indemnización. Esa disposición se acogía al hecho real de que la ubicación actual de la población en el territorio, ha obedecido a causas precisas (clima, fertilidad) y al asentamiento en esa misma tierra, perseguía concentrarla, en escala nacional, en unidades económicas que se transformarían en pueblos o aldeas prósperos, poniendo fin a la dispersión en que hoy vive el campesinado. Establecía la Ley concretamente, que todo individuo o grupo de población que como trabajador APTO para el trabajo agrícola, por ese solo hecho, tenía derecho a ser dotado y, realizada la dotación, los mismos campesinos elegirán sus Comités Administrativos encargados de la organización de la producción y del mayor desarrollo económico del grupo de población. Por último, la Ley prohibía el arrendamiento de las parcelas y limitaba el derecho a enajenarlas en el sentido de que solo se autorizaba la venta a otro campesino que no poseyera parcela, disposición esta que imponía que de nuevo se concentrara la tierra en pocas manos.

Ese contenido humano y al mismo tiempo expresión de la realidad del problema agrario venezolano, le conquistó a la Ley el apoyo del campesinado, no obstante las excepciones de expropiabilidad que contenía y la limitación del patrimonio del Instituto con el cual se realizarían las adquisiciones y expropiaciones. El campesinado y las fuerzas democráticas consecuentes comprendieron que dependían de ellos, de su movilización y presión de masas, el que la Ley sufriera luego modificaciones que satisficieran sobre la marcha las necesidades del campesinado, así como que el Instituto fuera provisto de mayores fondos.

Las fuerzas reaccionarias, no obstante que esa Ley establecía que no serían expropiados los fundos de café, cacao, caña, sisal y otros, que las expropiaciones se realizarían mediante indemnizaciones y sobre aquellas tierras incultas o que estuvieran trabajadas por arrendatarios, medianeros y conuqueros; no obstante que establecía el derecho para los propietarios a reservarse una extensión de 150 Hs. en los fundos objeto de expropiación, las fuerzas reaccionarias se agruparon y desahogaron la más violenta oposición de prensa, de rumores, de sabotajes. Ya hemos examinado la causa profunda y no olvidada que los motivaba. Aprobada la Ley por el Congreso, resolvieron impedir su aplicación por cualquier medio. El 20 de setiembre de 1945 el Ejecutivo la promulgó. Antes de cumplirse un mes, el Gobierno de Medina había sido derrocado por el golpe de Estado de Octubre 18 y antes de transcurrir seis meses, había sido derogada dicha Ley por el Decreto N° 183 de la Junta de Gobierno.

No hacemos una afirmación precipitada. Los dirigentes neo-democratas embarrados en una oposición futurista al Gobierno de Medina, íntimamente en connivencia con las fuerzas reaccionarias, participaron activamente en la campaña contra la Ley Agraria, arguyendo que era una "Ley gasosa" que "no satisfacía las aspiraciones del campesinado", pero sin precisar en que consistía lo "gaseoso". Sostenían desde entonces, además, que el problema de Venezuela era un problema de producción que se resolvía por medio de la mecanización de la agricultura. Pero ese antecedente hubiera quedado desvanecido, si ya formando parte del nuevo Gobierno, investidos de los poderes extraordinarios, hubieran comenzado a realizar la Reforma Agraria corrigiendo a la Ley las deficiencias y limitaciones que contenía. Por el contrario, no solo la derogaron, sino que al dictar el Decreto 183 tomaron posición en contra de la Reforma Agraria misma "...que aún cuando no se dispone en la actualidad del equipo mecanizado suficiente para someter la explotación:

de nuestros campos a un trabajo intensivo, la racional distribución de las tierras aptas para la agricultura que permanecen incultas y su adecuada explotación de acuerdo con los planes y estudios realizados por el M.A.C., contribuirá en forma apreciable a solucionar el problema de nuestra deficitaria producción.... 3°.- Dichas comisiones podrán también realizar gestiones para obtener de los propietarios particulares las tierras no cultivadas su arrendamiento al MAC para que ese Despacho proceda a subarrendarlas entre los campesinos que las necesitan... Por una parte hacían descansar demagógicamente el aumento de la producción sobre los planes que el MAC elaboraría y realizaría, por otra, se ofrecían ante los latifundistas como sus administradores para el cobro de rentas por arrendamiento, asegurándoles de esta manera la estabilidad de su régimen de explotación de la masa campesina, repartiéndoles además, por conducto del MAC, del ITIC y el BAP cuantiosos créditos.

Mientras ocultaban esta política de traición a la masa campesina de su partido, por los conductos internos del mismo, lo hacían creer que tan pronto se reuniera la Constituyente se procedería a la distribución de tierras.

Pero se reunió la Constituyente y ya en tercera discusión el proyecto de Constitución, Ramón Quijada propuso fuera eliminado de la misma el derecho de los individuos y núcleos campesinos a ser dotados de tierra, que el proyecto establecía y había sido aprobado en las dos primeras discusiones. En su artículo aparecido en "El País" del 23/5/47, Quijada con toda claridad expuso la nueva política Agraria de Acción Democrática, coincidente con los intereses de latifundistas, capitalistas e imperialistas: "No es pues al poblado, allí donde existe, a quien ha de dotarse de tierras, tomadas, seguramente, de las fincas vecinas, destruyendo así buenas unidades económicas. Es a la tierra plana fértil y regable (siégase bien) A LA QUE SE DEBE DOTAR DEL CONTINGENTE CAMPESINO, organizados en Cooperativas o COMO OBREROS AGRICOLAS con derechos sociales, al servicio de la empresa particular explotada con métodos modernos...." En su artículo del día siguiente 24, precisó aún más: "Al tratar sobre la cuestión agraria venezolana, siempre parto de la premisa de que la Reforma tiene que contemplar en su primera etapa un objetivo fundamental: el de elevar la producción hasta cubrir las necesidades del mercado interno de bienes naturales de consumo. En los actuales momentos, todos los demás objetivos, por importantes que sean, deben subordinarse a la urgente, a la inaplazable necesidad de producir..... La tarea inmediata que hay que cumplir en las tierras del patrimonio nacional no es la de la parcelación "revolucionaria", sino la de la roturación y la siembra. Y allí, donde quiera que haya un hacendado con su tierra cultivada o en plan de hacerlo, lo que debe llegar es el aliento y el apoyo del Estado y de todos los venezolanos,..."

La indignación y la protesta que tan descarada traición produjo en las fuerzas populares, llegó a la base de Acción Democrática y sus líderes se vieron obligados a rectificar, pero a medias. En la Constitución quedó establecido el derecho de los campesinos de ser dotados de tierra, pero en forma amañada, confusa:

"Artículo 69. El Estado realizará una acción planificada y sistemática orientada a transformar la estructura agraria nacional, a racionalizar la explotación agropecuaria; a organizar y distribuir el crédito, a mejorar las condiciones de vida del medio rural y a la progresiva emancipación económica y social de la población campesina. Una Ley especial determinará las condiciones técnicas y las demás normas con el interés nacional, mediante las cuales hará efectivo y eficaz el ejercicio del derecho que la Nación reconoce a las asociaciones de campesinos y a los individuos, aptos para el trabajo agrícola o pecuario y que carezcan de tierras laborables o no las posean en cantidad suficiente, a

ser detalles de ellas y de los medios necesarios para hacerlas producir".

El propósito de transformar la estructura agraria del país mediante la incorporación del campesino al proceso de la producción de la tierra en propiedad, que él, pues, sustituiría por el de realizar una transformación de la estructura agraria por medio de acciones planificadas del Estado, de racionalización de la explotación agropecuaria y de mejoramiento de las condiciones de vida del medic rural sin afectar las actuales relaciones de producción entre los dueños de la tierra y la población campesina, tales el arrendamiento, las medianías, el peonaje. Las vías de comunicación, la mecanización de la agricultura, la electricidad, mejorar las condiciones de vida del medic rural, pero no poner término a la explotación que sufre el campesinado. Y con la finalidad de hacer más ambiguo el artículo y menos concreto el derecho de los campesinos a ser dueños de tierra en propiedad, sustituyeron también el término "núcleo de población", por el de "asociaciones campesinas". El derecho a la detación ya no lo tendría una entidad real, viviente, el núcleo o pueblo, ubicado en una región precisa, sino una "asociación campesina" de por sí indeterminada, no existente hasta el momento de constituirse.

Sin embargo, como esa redacción resultó aprobada tras una larga discusión que puso en evidencia que los Constituyentistas, ante las protestas de las masas, se pronunciaban por el derecho de los campesinos a ser dueños de tierra en propiedad, es esta la interpretación del artículo constitucional que tiene valor legal y por tanto, la que las fuerzas democráticas deben reivindicar con todo empeño y firmeza.

La Constitución entró en vigencia el 5 de julio de 1947. Y ese "Estado" comedió al que los dirigentes acción-democratistas enloquecen la realización milagrosa de todos los proyectos, como si fuera una entidad por encima de las clases y no el ejecutor de los mandatos de las clases acaparadoras de los medios de producción de todas las del poder económico, ese "Estado" naturalmente, no ha hecho otra cosa por el "mejoramiento de las condiciones de vida del medic rural", que continuar distribuyendo cuantiosos créditos a los grandes latifundistas por intermedio del MAC, del ITIC, el BAP y la Corporación Venezolana de Fomento y abrir las puertas de la producción agropecuaria a los trusts imperialistas, a Nelson Rockefeller, quien ya tiene adquiridos 15.000 hectáreas en diversos lugares del país, para ponerlas a producir mediante la explotación del campesinado venezolano. Ya veremos al MOP construyendo carreteras que entronquen las propiedades de Rockefeller a las vías centrales y todo ello para "mejorar las condiciones de vida del medic rural".

En la discusión del citado artículo 69 de la Constitución, los dirigentes accióndemocratistas pusieron más al descubierto la tarea que desde octubre de 1945 se habían trazado: confundir y engañar a la masa de su partido y al pueblo en general, ofreciendo y realizando parcialmente reformas que no afectarían las existentes relaciones de clases, mientras en la práctica aseguraban y fortalecían los fundamentos en que se apoyan los intereses de clase de los grandes propietarios de tierra, de los capitalistas y trusts imperialistas. En el caso concreto del problema agrario, ofrecían realizar una "profunda reforma agraria" en abstracto; en los hechos condicionaban la redacción del artículo constitucional a la elaboración de un proyecto de Ley Agraria que debía garantizar el mantenimiento en el campo del amplio mercado de mano de obra barata, tanto para las grandes y medianas explotaciones agropecuarias, como para las explotaciones petroleras.

Al país había llegado, importado de México, el Ingeniero Agrónomo Fernández y Fernández, quien condecorado de la rica experiencia de la Reforma Agraria mexicana, estaba en capacidad de suministrar a los Dirigentes acciondemocratistas la fórmula para mantener las existentes relaciones de producción en el campo, encubriéndolas con el adorno de una "técnica," pero ficticia, reforma agraria susceptible de confundir y engañar a sectores obreros y campesinos. Suyas son las sofisticados razonamientos que en la Constituyente repitió como un loro Quijada, sobre el "sujeto de derecho agrario", sobre las tres especies de latifundismo, sobre las "comunidades agrarias", sobre el "derecho de la tierra a ser dotada de contingentes campesinos". Suyas son también las confusiones entre parcelación y minifundios, las tergiversaciones y falsedades que sobre la reforma agraria en México circularon y circulan los Dirigentes accion-democratistas desde sus órganos de prensa y desde la tribuna parlamentaria. Fernández y Fernández ha tiempo buscaba como justificar teóricamente su participación en el grupo de tráfugas que se proponía paralizar la realización de la reforma agraria en su país, grupo que con el advenimiento de Alemán a la Presidencia de la República, logró fuera reformado el Artº 27 de la Constitución, en el sentido de favorecer el enriquecimiento de los medianos propietarios de tierra a costa de la gran masa campesina.

A Fernández y Fernández le encomendaron la elaboración del proyecto de Ley que, presentado por la fracción mayoritaria, ha aprobado la Cámara de Diputados. No mentía el periodista que en tono exaltado no recordamos si en "El País" o en el "Nacional", afirmaba que en la confección de ese proyecto no había intervenido ningún abogado. Pero tampoco intervinieron los campesinos como él quería sugerirlo. El padre del proyecto es, pues un ingeniero agrónomo, por añadidura expulsado de la Liga de Agrónomos Socialistas de México por contrarrevolucionario, por atentar contra los intereses de los campesinos.

Y cabe aquí, antes de que entremos a examinar el proyecto en cuestión, que nos detengamos un momento a comentar la posición de quienes, llamándose comunistas, intentaron ocultar su oportunismo y seguidismo tras el biombo del apoyo caluroso a sus "partes positivas" y de críticas a sus "partes negativas", fingiendo ignorar el fondo y la finalidad del proyecto. Es esta una desvirtuada actividad contrarrevolucionaria que en nuestro país han introducido esos llamados "bobitos". Las leyes tienen por origen la necesidad de reglamentar las relaciones sociales entre los hombres y los pueblos. Pero, en una sociedad dividida en clases -la nuestra está dividida en clases antagónicas como bien saben los "bobitos"- la ley viene a ser un compromiso mediante el cual las clases acaparadoras de los medios de producción, no por filantropía, sino por la presión de las clases desposeídas, ceden en beneficio de éstas algunas ventajas. Una ley será por tanto progresista en la medida en que reconozca y garantice a las clases desposeídas las conquistas que hayan alcanzado en sus luchas. Por el contrario, será una ley reaccionaria, si arrebata derechos adquiridos, si suma a las clases desposeídas en una mayor dependencia con respecto a las poseedoras, ya sea económica o políticamente. No tienen, pues las leyes "partes positivas" y "partes negativas". Tienen un contenido y una finalidad que las caracteriza. La cuestión está en precisar ese contenido y finalidad y esa es la tarea de la vanguardia del movimiento revolucionario, sin olvidar, en lo que respecta a las leyes de contenido y finalidad progresista, que por tratarse de un compromiso en el cual las clases poseedoras se reservan buena parte de defensa de sus privilegios, estas leyes en régimen capitalista nunca llegan a satisfacer las aspiraciones populares. En una sociedad socialista, en la Unión Soviética, la ley simplemente regu-

a las armoniosas relaciones entre los ciudadanos, ya que todos ellos son iguales en cuanto a las posibilidades de disfrute de la riqueza que crean con su trabajo y en cuanto a la igual obligación de trabajar en común en la construcción de la nueva sociedad. La Ley no tiene, pues en la Unión Soviética, la calidad de compromiso que la caracteriza en la sociedad capitalista.

Ustedes, obreros, saben muy bien por estarso debatiendo desde 1936 con apoyo en la Ley del Trabajo, lo que ha representado para vuestra clase la finalidad y contenido que las conquistas internacionales del proletariado impusieron a esa ley: protección a los trabajadores contra la explotación de los patrones, poniendo del hecho real de la profunda desigualdad económica existente entre trabajadores y patrones y la justicia que asiste a los primeros de ser equiparados a los segundos por medio de disposiciones legales. Saben también como ese contenido y finalidad se encuentra limitado por disposiciones que en la misma ley se reservaron los patrones, tales las relativas al "preaviso", que niegan la estabilidad en el trabajo a los obreros y empleados y los entrega a las represalias de los patrones. Saben ustedes, por último, como con las modificaciones introducidas a esa ley en 1945, se persiguió restringir la libertad de organización sindical, así como también, que a proposición de la fracción mayoritaria acción-democrática en la Constituyente, se elevó a precepto constitucional el "preaviso" y se limitó el derecho de huelga con aquello de "salvo en los servicios públicos". Esas modificaciones y disposiciones constitucionales no son "partes negativas" que coexisten con "partes positivas" en la legislación del trabajo. Son, pura y simplemente, zarpazos reaccionarios en beneficio de las clases poseedoras y apegados al contenido y finalidad de la Ley del 36.

El proyecto de Ley Agraria, enfocado dentro de este orden de conceptos, que ostimo identificados con la ideología revolucionaria, proletaria, tiene por consiguiente su contenido y finalidad. De lo que se trata es de precisarlos para que la clase obrera, el campesinado y los sectores progresistas conscientemente se pronuncien a favor del proyecto o en su contra. Proceder de otra forma, verborrear sobre sus "partes positivas" y sus "partes negativas", no conduce como lo acaba de demostrar la aprobación de la Ley Agraria- sino a engañar y desarmar a los obreros y campesinos, a enyugarlos al carro de sus enemigos de clase. Y ese papel es el que han desempeñado los "bobitos" al no desenmascarar la evidente entrega de los dirigentes accióndemocráticos a latifundistas, capitalistas y trusts imperialistas, por conservar los cargos y gabelas personales que tienen en el aparato del Estado.

Al analizar el artículo 69 de la Constitución y su discusión en la Constituyente, afirmamos que al establecer la Ley del 45 como propósito de la misma "la transformación de la estructura agraria del país mediante la incorporación del campesino al proceso de la producción agropecuaria, la distribución equitativa de la tierra, etc", al reconocer por su Artº 2º el derecho de los GRUPOS campesinos a ser dotados de tierra en propiedad y por el Artº 70, que esas dotaciones se realizarían precisamente en los lugares mismos de asiento de esos grupos, con las "tierras cultivables -Art/73- necesarias para el establecimiento de los solicitantes y con "los montes y aguas indisponibles para los usos ordinarios y las áreas adecuadas para las construcciones que se destinan al beneficio común de los parceleros, tales como escuelas, unidad sanitaria, parque infantil, campos de deportes y otros semejantes; esa Ley, precisó un contenido y finalidad progresista: liberar al hombre campesino de la explotación y explotación de los propietarios de tierra, liquidar en su base el régimen latifundista y las relaciones de producción que engendra y lo sustentan

el arrendamiento, las medierías, el peonaje). Además, y como una consecuencia de su contenido y finalidad progresistas, diversas disposiciones de ella hacían descansar la realización de la Reforma Agraria en la participación activa, directa, consciente y organizada del campesinado. Incluso, en los Centros y Colonias previstos por la Ley, se establecía que la participación en ellos de los campesinos sería VOLUNTARIA y que los Consejos que los administrarían estarían integrados por un Director Técnico designado por el Instituto y por no menos de cuatro ni más de ocho miembros elegidos directamente por los campesinos.

Sin un mayor esfuerzo podemos explicarnos el porque del apoyo entusiasta y espontáneo del campesinado a esa Ley y el porque del empuje -que realizaron- de las fuerzas reaccionarias en impedir que se llevara a la práctica. ¡Cuán miserables y despreciables se evidencian los calificativos de "Ley Medinista", de "Ley Biagginera" con los que los señores y "bobitos" mancomunados han intentado desmerecerla ante las masas para justificar el haberla derogado!

Al referirnos al contenido y finalidad del Proyecto de Ley Agraria elaborado por latifundistas y trusts imperialistas y aprobado por la fracción mayoritaria alca, afirmamos también que no eran otras que el de arrebatar al campesinado su conquista del derecho a ser dueño de tierra en propiedad, mantener las actuales relaciones de producción en beneficio de latifundistas, capitalistas y trusts imperialistas; conservarles, en última instancia, un mercado de mano de obra barata. Por eso lo hemos calificado de reaccionario. Y si eso era y es el contenido y finalidad del proyecto, como lo probaremos, ¿qué persiguen los "bobitos" con eso de las "partes positivas" y las "partes negativas", si no era engañar a los campesinos y a la clase obrera llamando su atención sobre disposiciones como la Decula Agraria, para que no vieran el fondo del proyecto?.

En su artº 1º la nueva Ley establece:

"La presente Ley tiene por objeto transformar la estructura agraria nacional, racionalizar la explotación agropecuaria, mejorar las condiciones de vida del medio rural, la progresiva emancipación social y económica de la población campesina, y la regularización del derecho a ser dueños de tierra que la Constitución reconoce a las Asociaciones Campesinas y a los individuos aptos para el trabajo agropecuario que carezcan de ella y de los medios para hacerla producir".

Como ustedes observarán, ya no es propósito de la Ley la transformación de la estructura agraria del país MEDIANTE la incorporación del campesino al proceso de la producción. Ahora el proyecto ya Ley, se propone efectuar esa transformación de la estructura agraria, mediante: la racionalización de la explotación agropecuaria, el mejoramiento de las condiciones de vida del medio rural y la progresiva emancipación social y económica de la población campesina, lo que en palabras concretas quiere decir, ayuda del Estado a los latifundistas, a los grandes y medianos propietarios de tierra, con cuantiosos créditos para que racionalicen, mecanicen sus explotaciones, garantías a Rockefeller y demás imperialistas en sus inversiones en el campo, construcción de vías y obras de riego que mejoren el medio rural en beneficio de esa clase de propietarios. Transformación tal de la estructura agraria ~~xxxxxxxx~~ ría, por lo demás, que ha venido siendo la política de la Junta de Gobierno desde cuando la Ley Agraria de 1945 fué derogada. Y para que los latifundistas y Rockefeller no carecieran de mano de

obra, de peones "pie y pala", se emancipará progresivamente a la población campesina", aplicando estas dos medidas: a).- se sugiere a los propietarios de explotaciones agropecuarias que suministren a sus peones "vivienda rural" y dos hectáreas para que cultiven una "huerta familiar" (Art.82) y, b).- Los campesinos tendrán el derecho a SOLICITAR -si es que no se los obliga por la fuerza a que lo incluya en uno de los Establecimientos Agrarios (Comunidades, Cooperativas, Colonias) que el Instituto Nacional Agrario organizará en los lugares que crea conveniente, que funcionarán bajo su suprema dirección y administración, percibiendo los campesinos a fin de año la migaja de su trabajo que el administrador acuerde repartirlos.

Respecto al punto a).- los campesinos saben bien que no se trata sino de actualizar y legalizar una forma de explotación feudal, de la que ellos han venido liberándose en el curso de los últimos años. En efecto, al desaparecer la esclavitud, los propietarios de tierra se apresuraron a sustituir la mano de obra esclava, asentando campesinos en sus fundos con la engañifa de una "tierrita que sembrar", de manera de disponer de peones y en los días del año que los necesitaran. ¿que nos no saben en Venezuela que las haciendas de café, cacao, caña, etc, crecieron y se desarrollaron a base del sistema de medianerías que consistía en ofrecer "bondadosamente" al campesino un "sitio" en el fundo donde construir un rancho, sembrar "conuco" en más de dos hectáreas y plantar árboles que se repartirían de por mitad entre el propietario y el medianero, pero con la obligación para éste de vender su parte al primer requerimiento del latifundista?. ¿Quién no sabe que los campesinos por hacerse dolo cuenta de la explotación que sufrían y de que sus "matas" antes de estar en producción ya tenían que entregárselas al propietario de la tierra en pago de alimentos y objetos que los fiaba a precios escandalosos, que por haber abierto los ojos comenzaron a abandonar los campos, de donde proviene el "lamento" que desde hace años lanzan los hacendados -latifundistas y capitalistas- quejándose de la "falta de brazos?". ¿Pretenden los dirigentes acciondemocratas y "bobitos" "transformar la estructura agraria" del país regresando al pasado y que podrán engañar a los campesinos con sólo un cambio de palabras, en lugar de rancho, "vivienda popular" y en lugar de conuco, "huerta familiar"?

Según ese mismo Artº1º, la nueva Ley tiene también por objeto la "regularización del derecho a ser dotados de tierra que la Constitución reconoce a las Asociaciones Campesinas y a los individuos APTOS para el trabajo agropecuario que carezcan de ella y de los medios para hacerla producir". Para el más profano en leyes, se desprende de este artículo, que toda Asociación Campesina o individuo que reúna las condiciones de APTITUD que la misma ley establece (Artº39: ser mayor de 18 años, carecer de tierra propia, etc) deberá ser dotado de tierra, se le deberá entregar una porción de tierra en propiedad. Sin embargo, no fué esa la interpretación de los autores. Para ellos, ese artículo lo que establecía era que los campesinos tenían tan sólo el derecho a SOLICITAR del Instituto Agrario los incluyera en uno de los Establecimientos Agrarios que organizarara. Veámos como impusieron su atropello con el apoyo caluroso de los "bobitos" al establecer en el Artº 6º:

"Recibidas las solicitudes el Instituto le dará curso tendiendo a verificar la aptitud de los solicitantes y de las tierras, así como DEL TIPO DE ESTABLECIMIENTO QUE CONVENGA FUNDAR. Terminada la tramitación del expediente y si la dotación fuere resuelta favorablemente, el Instituto procederá a realizar las adjudicaciones y a ORGANIZAR EL ESTABLECIMIENTO de acuerdo con los planes trazados al efecto, destina



de las tierras que posea en el lugar o adquiriéndolas de acuerdo con las normas establecidas en el Título IV".

Al investir al Instituto de la facultad omnímoda de "verificar el tipo de Establecimiento que convenga fundar" y, resuelta favorablemente la adjudicación, "proceder a organizar el Establecimiento", condicionaron el derecho constitucional de los campesinos a ser dotados de tierra en propiedad, a la Resolución de un Instituto que precisamente no sería de dotación, por lo que esa disposición no reglamenta el ejercicio de un derecho, sino que lo usurpa. Tal como acontecía en tiempos de López Contreras con los Acrocheros la expresión del pensamiento y de asociación, los que no obstante estar consagrados por la Constitución y reglamentado su ejercicio por la Ley Lara; Mibelli, interpretando ésta a su manera, a la manera de los Quijano, Hurtado, Lander, prohibía las organizaciones y encarcelaba a quienes protestaran contra el atropello. Más luego nos referiremos al aspecto jurídico. Ahora nos interesa evidenciar ante ustedes que en el Art. 6º se expresan el contenido y finalidad de la nueva Ley Agraria, las que como ya hemos dicho, no son otras que arrebatar al campesinado su derecho a ser dotados de tierra en propiedad y conservar en el campo un ambiente moral de mano de obra barata para beneficio de latifundistas, capitalistas y trusts imperialistas.

Sobre ese artículo sexto los Dirigentes socialdemócratas, han creado el andamiaje de la contra-reforma agraria, al investir a un Instituto de poderes omnímodos para discriminar al campesinado y obligarlo a asociarse en Establecimientos bajo su dirección y la del Estado, órgano precisamente de las clases antagónicas y por tanto enemigas del campesinado y de la clase obrera; al usurpar al campesinado el derecho de organizar su propia producción, para colocarlo bajo la dependencia de un organismo burocrático que no dotará de tierras en propiedad a la masa campesina, sino que se ocupará de "dotar de contingentes campesinos a la tierra" en aquellos lugares en donde los grandes, medianos e imperialistas propietarios estén fallos de brazos que se las trabajen.

¿Qué son los Establecimientos Agrarios y qué campesinos serán organizados en ellos? El Capítulo III le dedica al régimen de Establecimientos. El Artículo 15 determina:

"El Instituto organizará, de acuerdo con la aptitud de los solicitantes y de las tierras, así como de las convenciones técnicas y económicas aconsejables en cada caso los siguientes establecimientos agrarios: a).- Colonias, b) Cooperativas, c).- Comunales, d).- Granja individual".

Se faculta, pues al Instituto para discriminar a los campesinos a su antojo: a unos los obligará a pertenecer a una Colonia, a otros a una Comunidad, a una Cooperativa, etc. Pero para mayor claridad, recordemos lo que indistintamente declaró Quijano en una intervención en el Congreso. Dijo que en Venezuela había agricultores que estaban en capacidad técnica y administrativa para recibir parcelas en propiedad y que la gran masa campesina, por su atraso mental, era incapaz, técnica y administrativamente, para recibir la tierra en propiedad; que debía ser guiada, conducida por el Estado. A los primeros-aclarados nosotros de acuerdo con el Art. 10 se les entregarían parcelas que no excederían de 25 hectáreas. A los segundos, se les organizaría en las Comunidades Agrarias, en las Cooperativas y Colonias. A los primeros, hijos de latifundistas o de medianos propietarios, a los agrónomos, se les entregarían parcelas para que las cultivaran con peones campesinos; a la masa campesina el Instituto la guiará, conducirá y organizará en



beneficio de los personeros del Estado. De una parte crean las bases para el desarrollo de una nueva clase de ricos en el campo, de la otra parte, se encierra a la masa campesina dentro de las tenazas de un aparato burocrático que se encargará de destruir su iniciativa de obstaculizar su desarrollo.

Esas comunidades, cooperativas, etc. estarán regidas -Art.17- por Estatutos y Reglamentos que elaborará el Instituto, quien ejercerá la suprema dirección y administración de las mismas -Art.21- por medio de un Director Técnico y demás empleados necesarios de libre elección y remoción del Instituto y cuyos sueldos serán costados por los que trabajan en las Comunidades, Cooperativas, etc. El Instituto resolverá, en definitiva, sobre los planes de cultivo y sobre las desavenencias que surjan entre los miembros de los establecimientos y los Directores Técnicos o los empleados.

Y así tienen ustedes a ese prepotente organismo entremetiéndose en los más ínfimos detalles de los Establecimientos, dirigiendo la producción de los campesinos en escala nacional. Como augurio de su éxito, podríamos equipararlo con la Empresa Municipal de Transportes Urbanos. ¿Osará alguien entre ustedes negar que esta ciudad posee el servicio de transportes urbanos más eficiente y mejor organizada del Continente?

Pero falta todavía otro soporte del andamiaje cuya base descansa en el Artº.6º. ¿Cómo adjudicarán las tierras? Veámos el Artº30:

"a)

En Propiedad, cuando el adjudicatario adquiere la tierra por un acto de compra-venta, con las condiciones que el Instituto establezca;

"b).- En arrendamiento, con opción de compra o sin ella, a término fijo o indeterminado;

"c).- En usufructo, con cargo para el beneficiario de cultivar la tierra y mejorarla y de pagar una prestación fija o variable, con las condiciones que el Instituto establezca;

"d).- En disfrute precario, cuando la tierra se concede por un período de prueba.

Como hemos visto y se desprende de los artículos anteriormente citados, adjudicarán tierra en propiedad a los "capacitados Técnica y administrativamente", al reducido número de escogidos y seleccionados por el Instituto, hijos de latifundistas, miembros del partido en el Gobierno, etc. Para la masa campesina reservan el ARRENDAMIENTO, EL USUFRUCTO, EL DISFRUTE PRECARIO y la organización OBLIGATORIA en Comunidades, Cooperativas, etc., lo que equivale a mantenerla sujeta a las formas de explotación semifeudales, ya que el Instituto a más de las omnímodas atribuciones mencionadas, retendrá la propiedad de la tierra y la facultad de declarar extintas las adjudicaciones, convirtiéndose de esta manera en un retista explotador del trabajo de los campesinos y en un dispensador de gracias, características antidemocráticas que ya sabemos a que clases de arbitrariedades arriban en un Estado órgano de las clases detentadoras de los medios de producción.

Fernández y Fernández y su "aprovechado" discípulo Quijada, y en buena parte también los "bobitos", han pretendido hacer creer que esos Establecimientos, especialmente las Comunidades Agrarias, implican formas superiores de producción, ya que en ellos -dicen- el trabajo se

## POR UNA REFORMA AGRARIA DEMOCRATICA Y POPULAR

Agradezco fraternalmente a la Directiva de la Federación de Trabajadores del Distrito Federal y del Estado Miranda, el honor que me ha dispensado al invitarme a participar en el ciclo de conferencias que tiene organizado. Y ese honor es tanto más grande por la responsabilidad que implica expresar opiniones en presencia de los cuadros más destacados de la clase obrera, sobre quienes pesa la misión de orientar a esa clase en las luchas por un mundo mejor, sin explotados ni explotadores; por una sociedad nueva que garantice a todos sus miembros iguales posibilidades para participar en su construcción e iguales posibilidades para disfrutar del bienestar, de la paz y la libertad, abolida la propiedad privada sobre los medios de producción que engendra la lucha de clases y las guerras entre los pueblos.

En el movimiento revolucionario de nuestro país, siempre ha sido preocupación muy especial para mí, la tarea de despertar y crear en la clase obrera, por medio de su vanguardia organizada, una conciencia clara sobre el papel histórico que está determinada a desempeñar en el desarrollo de la humanidad. Mientras la clase obrera no adquiere esa conciencia, es fácil juguete de las clases que la explotan, debido a la influencia en sus filas de elementos extraños a sus propios intereses. Es cierto que en nuestro país podríamos decir que la clase obrera nació a la vida económica y social en fecha reciente; pero ello no niega que en el curso de los años que vivimos de la independencia a nuestros días, las masas trabajadoras de las ciudades y los campos no hayan sido llevadas a las contiendas civiles o militares a derramar su sangre por intereses inmediatos de otros grupos y clases, quienes logrando el triunfo les dieron la espalda y dejaron incumplidos los programas y promesas. Fueron los trabajadores de las ciudades y de los campos los que integraron la base del movimiento llamado liberal hace ya un siglo. Y cuando ese movimiento, después de cruentas luchas y de las guerras federales, tenía derrotadas a las fuerzas reaccionarias y estaba en capacidad de proceder a una redistribución de tierras que satisficiera las necesidades del campesinado y del desarrollo económico normal de nuestra economía, Guzmán Blanco, asumiendo la jefatura de los ejércitos triunfantes, pactó con los conservadores, traicionando a las masas populares al firmar el tristemente célebre Tratado de Cocha. Las reformas económicas, la redistribución de la tierra, fueron echadas al cesto de los navajos sucios y los trabajadores de las ciudades y de los campos regresaron a sus hogares cubiertos de heridas y como único patrimonio, el recuerdo de las acciones realizadas y de los hermanos caídos en la lucha, cuyos cadáveres blanqueaban los caminos de toda Venezuela.

Hoy, gracias en número y provista de una experiencia preciosa extraída de los combates que han tenido lugar desde 1936, la clase obrera tiene más imperiosa necesidad de valorarse y encontrarse a sí misma. El país a su vez se ha desarrollado y sobre la independencia y soberanía nacionales, pesan amenazas tan lúgubres por parte de los trusts imperialistas, que Venezuela reclama de su clase obrera una actitud más firme y decidida, por eso en los sucesos que actualmente vivimos, se está jugando su propio porvenir y el futuro de todo el pueblo venezolano. Sólo una conciencia clara de clase, puede orientar a los obreros en la provisión de las acciones a realizar, en la apreciación de los sucesos y de las actuaciones de los partidos o grupos políticos que en ellos participan. Las fuerzas antipopulares, antidemocráticas, disponen de tal cúmulo de recursos publicitarios y de todo órden, que en verdad tienen en sus manos la posibilidad de imponer una opinión, es decir, de crear tales corrientes de interpretación, que las masas trabajadoras contra sus propios intereses, lleguen incluso a dividirse y a hacerse partidarias de sus propios enemigos.

Como ejemplo he de recordar ante ustedes una de esas "corrientes" que bajo diferentes formas de expresión, circulaba a un mismo tiempo

colectivo y se podrán usar las más modernas máquinas. En igual forma le hacían propaganda Mussolini a sus organizaciones agrícolas, lo que simulaba olvidar los panageristas de esos Establecimientos. En su intento de ocultar a las masas que mientras los medios de producción y entre ellos la tierra, que mientras el poder económico y político no pasan a manos de la clase obrera y del campesinado, la estatización de la producción no conduce sino a un mayor incremento del enriquecimiento de las clases poseedoras y a resolverlos problemas a costa de una mayor miseria de la gran masa de población.

En régimen capitalista solo puede hablarse de producción colectiva en la agricultura a base de una voluntaria unión y cooperación entre los que la vayan a trabajar en común, conservando cada quien la propiedad de su parcela. Eso ha sido el éxito ~~xxxxxxxx~~ de la colectivización en la "La Laguna", México. La Comunidad Agraria del proyecto de Ley, a base de obligar a los campesinos a trabajar la tierra en usufructo, con la condición de pagar una prestación o arrendamiento al Instituto, sometidos a la caprichosa dirección técnica y administrativa de ese aparato burocrático, será siempre para los campesinos y con justificada razón, una modalidad del trabajo forzado, de la esclavitud y saqueamiento en que los propietarios de la tierra y el Estado los han mantenido hasta ahora.

Al régimen latifundista no se le puede poner fin sino desmembrando el latifundio, la gran propiedad y creando nuevas formas de tenencia de la tierra y de relaciones de producción que incorporen a la gran masa campesina con entusiasmo al proceso de la producción. Esa Ley Agraria, como creemos haberlo demostrado, persigue, por el contrario, conservar la gran propiedad -sustituyendo cuanto más a unos propietarios particulares con el Instituto- y mantener las actuales relaciones de producción semifeudales: el arrendamiento, el cenago, etc. Por ello no hemos vacilado en denunciarla ante ustedes como contrarrevolucionaria, como reaccionaria, ya que arrebató a la masa campesina el derecho a ser dotada de tierra en propiedad que por Ley de la República tenía ya adquirido desde 1945.

¿Y qué Reforma Agraria proponían ustedes?, se nos preguntará. Contestaremos ante lectura a los puntos expuestos en Memorial dirigido a la Cámara de Diputados por las Ligas Campesinas y Sindicatos Agrícolas del Estado Miranda, Memorial que la Cámara de Diputados no tomó en consideración, no obstante estar respaldado, no hoy, sino desde hace años, por el campesinado revolucionario de todo el país y por prestigiosas organizaciones obreras, como esta Federación que agrupa los sindicatos más consecuentemente revolucionarios:

1º.- Que los campesinos sean dotados gratuitamente de tierra en propiedad, en los lugares mismos donde los grupos de población están asentados y en las tierras que los circundan, sean de propiedad pública o de particulares. Reconocerle este postulado central, su reglamentación se limitaría a establecer las condiciones de aptitud, el procedimiento para realizar las dotaciones, la fijación de la extensión de las parcelas, de las propiedades inafectables; las excepciones por razón de salubridad, protección de los aprovisionamientos de aguas, etc que determinen que un grupo de población no sea dotado en su lugar de asiento, pero sí dotado en lugar cercano de la misma región; la obligación de proceder a la parcelación inmediatamente de efectuada la dotación;

2º.- Que por ser dotada la tierra gratuitamente, las parcelas sean constituidas en patrimonio familiar, por tanto prohibido gravarlas, venderlas o enajenarlas;

3°.- que el Instituto o Departamento que se cree, tenga por funciones exclusivamente todo lo relativo al régimen de tierras: dotaciones, parcelaciones, expropiaciones, etc, dependiendo ese organismo directamente del Presidente de la República;

4°.- que el Estado preste ayuda técnica y crediticia necesaria a los campesinos por intermedio de sus órganos dedicados al fomento e incremento de la producción (M.C, B.A.F, etc.)

5°.- que se cree un Fondo Nacional Agrario para atender a la realización de la Reforma Agraria, bajo la inmediata dependencia del Pto. de la República, el cual se autogenera con las tierras de la Nación, de los Estados y Municipios aptas para ser dotadas, con las tierras adquiridas por compra o expropiación, con los fondos que se destinen al efecto y con los cupones de una Deuda Agraria que debe crear el Congreso. Serán de ese Fondo que se pagarán las tierras adquiridas y las indemnizaciones por expropiación, entregando parte en dinero efectivo y parte en cupones de la Deuda Agraria proporcionalmente. El Patrimonio Nacional respaldaría la Deuda Agraria y su amortización y trámite se llevaría a cabo por intermedio del Ministro de Hacienda;

6°.- que se garantice a los campesinos la libertad de organización de su producción y que por medio de la ayuda del Estado (técnica y crediticia) se les facilite la organización de cooperativas, la adquisición de máquinas para su uso en común, etc;

7°.- que el Estado organice un verdadero sistema de créditos agrarios, así como una red de silos, almacenes, etc que liberen al campesino de los especuladores y acaparadores y aseguren la venta en los mercados de los excedentes de producción y su intercambio con los productos industrializados de las ciudades;

8°.- que el Estado, por medio de sus órganos respectivos, planifique los sistemas de riego y la utilización de los mismos en beneficio de la colectividad; que planifique la construcción de vías de comunicación, la reparación de los actuales caminos, etc;

9°.- que el Estado organice Centros de Experimentación, Estaciones de Máquinas, etc, e incluso, grandes explotaciones mecanizadas en las cuales participan VOLUNTARIAMENTE los campesinos, para garantizándoles que el trabajo acumulado por ellos les será reconocido y entregado en caso de dejar de formar parte de la explotación, etc.

10.- Que quede clara y precisamente establecido que los actuales pequeños propietarios que tienen en explotación sus tierras, no serán afectados por la ley, sino por el contrario, beneficiados por ella.

En esos 10 puntos los campesinos mirandinos concretan zaban el contenido y finalidad de una Reforma Agraria democrática y popular; la Reforma Agraria que pondría fin al régimen latifundista, que crearía las bases para la estructuración de una economía nacional propia y próspera, que incorporaría la gran masa de la población a la lucha por la reconquista de nuestra independencia y soberanía, politizándola por los trusts imperialistas. Con una semejante Reforma Agraria, si hubiera aumentado la producción de artículos alimenticios, abasteciendo no solo a los centros urbanos con la consiguiente reducción del costo de vida que beneficiaría a la clase obrera en especial, sino que primeramente hubiera abastecido a la misma población campesina, sometida hoy a la más grande lista de hambre que ha sufrido en el tiempo.

Porque esa Reforma Agraria democrática y popular desmembraba los latifundios, cerraba la puerta a la colonización de nuestro país por los trusts imperialistas. Los dirigentes acciondemocratistas, pasados al campo de las fuerzas reaccionarias, tenían que impedirla.

La nueva Ley Contra-Reforma Agraria es pues un triunfo de las fuerzas reaccionarias que ha sido posible de una parte, por disponer los dirigentes acciondemocratistas de una mayoría parlamentaria obtenida con la demagogia y las promesas elaboradas para las elecciones de la otra, por el oportunismo y celostinaje de los Diputados "bobitos" que les hicieron el juego propalando que el proyecto de Ley "era MUY SUPERIOR a la Ley de 1945". Las masas obreras y campesinas que votaron blanco el 14 de diciembre de 1947, tejieron ellas mismas la soga que las fuerzas reaccionarias usarán ahora para estrangular a todo el pueblo venezolano. Pero no debemos ~~sumirnos~~ sumirnos en el pesimismo y el desaliento. Por el contrario, la experiencia que la clase obrera, el campesinado y los sectores progresistas han adquirido con motivo de este episodio de la lucha de clases en nuestro país y adquirirán en los inmediatos años en los que la aplicación de la nueva Ley se encargará de descubrirles el velo que la demagogia puso ante sus ojos, deberán ser aprovechadas por la vanguardia de la clase obrera para colocarse a la cabeza del movimiento democrático y popular y conducir a las grandes masas a liberarse de la dirección de los agentes extranjeros y enemigos a sus intereses, a la reconquista de sus derechos usurpados, a la lucha por la liquidación del latifundismo, por la independencia de Venezuela del yugo de las fuerzas imperialistas.

Hoy, a diferencia de cuando Guzmán Blanco traicionó al movimiento democrático en Venezuela existe una nueva fuerza, la clase obrera, en cuya combatividad y conciencia revolucionaria descansa el porvenir de nuestro pueblo.

Tiembledenle las quijadas a los latifundistas e imperialistas que su triunfo será efímero.

en los medios sociales más antagónicos, y apoyada en la llamada política de buena vecindad que prosperó durante la segunda guerra mundial, perseguía crear una opinión propicia a la colonización de nuestro país por los trusts imperialistas yanquis. El eje en torno al cual giraba esa "corriente" descansaba sobre un concepto aunque intrínsecamente justo, aplicado al margen de la lucha de clases, servía esos propósitos: "para que Venezuela se incorpore a la vida civilizada tiene que convertirse en un país industrializado. La creación y desarrollo de grandes industrias es la única forma para destruir la miseria, incluso la que padecen las grandes masas campesinas. La industrialización proporcionará libertad, paz y bienestar a todos los venezolanos". Aceptada en abstracto es la premisa, que podríamos llamar de "ablandamiento", venía la segunda parte: ¿cómo industrializarnos no disponiendo Venezuela de suficiente capital acumulado para la adquisición de la gran maquinaria y de las materias primas que no producimos?. Contestando a esta pregunta se lanzaron entonces diversas soluciones aparentemente distintas, pero coincidentes todas en el objetivo perseguido: llamar al capital monopolista yanqui. En efecto Browder y Blas Roca elaboraron la "teoría" del tránsito pacífico del capitalismo al socialismo, la que aplicada por Haya de la Torre y Rómulo Betancourt derivó en que el imperialismo yanqui por influencia de los cambios ocurridos durante la guerra, había dejado de ser un peligro para la independencia y soberanía de los pueblos latinoamericanos, para convertirse en su aliado, en su benefactor. Las compañías petroleras-propusieron los oportunistas "bobitos"- debían ser obligadas a invertir el 50% de sus utilidades en el desarrollo de industrias en nuestro país. Se cantó el altruismo de Mr. Kaiser que prometía abandonar sus grandes explotaciones navieras en el Oeste de Estados Unidos, para venir a nuestro país a colaborar en el desarrollo de su industria. No llegó Mr. Kaiser, pero si vino Rockefeller atendiendo la invitación que le hiciera Rómulo Betancourt por sugerencias del Gerente de la Crcolo, y aquí lo tenemos convertido en un gran latifundista, acaparador de terrenos, succionador de sangre y vida de venezolanos. Incluso ha sido elaborada una tesis para optar al grado de doctor en Ciencias Jurídicas, que lleva por título esta pregunta: ¿Con los Estados Unidos o contra los Estados Unidos?. Por supuesto que el autor -el Diputado Domingo Alberto Ángel, a quien ustedes conocen por sus abrumadores discursos- se pronuncia por la "unidad continental" con los E.E.U.U., por abrirle las puertas al capital yanqui con "corazón" para que nos "civilice" e industrialice.

Recuerdo también, que en ocasión de dictar una conferencia en esta misma Federación, cuando ocupaba el local de Ibarra a Polota y sobre el mismo tema que se me ha fijado para la charla de hoy, un conocido líder obrero accióndemocratista me hizo esta pregunta: ¿No cree usted que es más revolucionario y que conviene más a los intereses de los trabajadores luchar por la industrialización del país, que gastar energías luchando por una Reforma Agraria?.

Le contesté que la perspectiva de la industrialización no podía ser planteada en abstracto, independientemente de los intereses colectivos y permanentes del pueblo venezolano, de su libertad y soberanía nacionales. Que por eso creía que el primer paso para industrializarnos en provecho nuestro, era la realización de una Reforma Agraria profunda, democrática y popular. Que de nada nos aprovecharía que nos convirtieran en una fábrica de rentas y superbeneficios para los monopolistas yanquis lo que nos conduciría, especialmente a la clase obrera, a sufrir todas las miseria y explotaciones del capitalismo y a perder nuestra independencia de país soberano.

Han pasado tres años y han notablemente para nuestro porvenir de país libre y soberano, nos están "industrializando" los imperialistas

yanquis. La "corriente" de opinión ha dado los resultados perseguidos. Con la anuencia y apoyo de grandes sectores de la población, la mayoría de los obreros petroleros ha sido encadenada por tres años, mediante un contrato colectivo, a los intereses de las compañías petroleras, impedida de realizar acciones por aumento de salarios, incluso de luchar por el cumplimiento de la Ley del Trabajo por parte de esas Compañías; fué derogada la Ley Agraria que reconocía a los campesinos el derecho a ser dotados de tierra en propiedad y aprobada una Ley Agraria por la Cámara de Diputados, que reconocía a los campesinos ese derecho y los mantendrá, en resumidas cuentas, para beneficiar de los intereses de los trusts imperialistas y sus aliados criollos, los latifundistas y capitalistas usureros, en condiciones de mayor miseria y ruina de las en que vive hoy.

Pero para que esta conclusión sea comprendida y aceptada, tenemos que basarla en un análisis, aunque rápido, de la estructura agraria de nuestro país y de las relaciones de producción, sociales y políticas que determina; en un examen de la lucha por transformar esa estructura y de las perspectivas con que se encara actualmente el pueblo venezolano y principalmente la clase obrera, como clase dirigente y consecuentemente defensora de los intereses populares, en su lucha por una Venezuela próspera, independiente y soberana.

Como todos sabemos, a la llegada de los conquistadores españoles esta porción de América estaba habitada por una población indígena, si no tan numerosa como la de México o Perú, por lo menos bastante importante, pues aún pervive buena cantidad de ella, no obstante haber sufrido más de 300 años de persecuciones y matanzas. Las corporaciones de motilonos que organizan las compañías petroleras en nuestros días para desalojarlos de sus territorios, son herederos de las "hazañas" de los conquistadores españoles. Los Reyes de España en premio a esos servicios de sus funcionarios y súbditos, les hacía donación de grandes extensiones de tierras y de los indios que en ella moraban. Se los llamaba "encomendados". De esta manera la población indígena fué despojada de cuanto era suyo y convertida en esclavos para el trabajo en las haciendas y minas. Eso fué el origen de la "sagrada" propiedad territorial, manchada con el robo y la sangre. Sobre esas grandes extensiones de tierra, en tal forma adquiridas y sembradas, se cimentó no sólo la estructura agropecuaria que aún subsiste, sino también el anormal asentamiento de nuestra población.

Aniquilados los indígenas por los rudos trabajos de fundación de las haciendas de cacao y café, desde aquella época frutos principales de exportación, los "encomendados" los reemplazaron con hombres cazados en África para ser vendidos en América, los que al igual que los indios fueron convertidos en esclavos, obligándolos a vivir hacinados en chozas en torno al sitio de las haciendas, como animales de trabajo. La importancia y poder político de los integrantes de las clases gobernantes de la Colonia, se medían por el número de hectáreas y de esclavos que poseían. La Independencia de la Monarquía Española no modificó esa estructura. Hubo en algunos casos sustitución de propietarios, desmembramiento de grandes propiedades por el reparto de herencias, pero la tierra continuó trabajada por esclavos mientras sus dueños percibían en las ciudades el importe íntegro de la venta de sus productos.

A mediados del siglo pasado se eliminó legalmente la esclavitud. Pero como el campesinado integrado por los ranunses, libertos, mulatos y mestizos carecía de tierras, y formaba desde la colonia la mayoría aplastante de la población para no perecer de hambre, reemplazó a los esclavos en las haciendas, creándose nuevas relaciones de producción semejantes a las prestaciones feudales: medianerías, arrendamientos, pago de renta en trabajo, peonaje etc., que equivalían, a pesar



de la aparente forma contractual, a pagar tributo a los dueños de las tierras para poder vivir y trabajar en ellas. Durante los años de la República, los campesinos sin tierra que para no pagar ese tributo se aventuraron a trasladarse a las tierras que aún permanecían libres de apropiación, las llamadas baldías, fueron luego desalojados por los nuevos latifundistas amparados por la fuerza coercitiva del Estado. El movimiento liberal que luchaba por transformar esa estructura y las garras federales que fueron su expresión más caracterizada, no lograron su objetivo. Como en la Colonia, en la provincia, todavía hoy el poder político descansa sobre el número de hectáreas y el número de "vecinos" que en ellas vive, que poseen los caciques regionales.

La explotación del campesinado por medio del trabajo esclavo hasta mediados del siglo pasado y después, por medio del trabajo servil de medianeros, pisatarios y peones, representaba, junto con el lucro del comercio, la principal fuente de enriquecimiento. La industria está naciendo en nuestro país; su desarrollo aún hoy es una fuente de lucro que aprovecha un sesento por ciento de capitalistas de las ciudades. Ello explica la tendencia a la concentración de la tierra en pocas manos y la perduración de las formas más exhaustivas de explotación del campesinado. La tierra sin el hombre que la trabaja, es riqueza, pero no produce enriquecimiento. Llamo a ustedes la atención sobre esta afirmación, porque desde que se planteó la realización de una Reforma Agraria en nuestro país, no ha sido la tierra como tal lo que los latifundistas y capitalistas han defendido al oponerse a ella, sino la fuente de enriquecimiento que se les escapaba, es decir, la fuerza de trabajo de los campesinos, ya que al ser convertidos por la reforma en propietarios, trabajarían sus parcelas para sí mismos. Recordarán ustedes que Ramón Quijada, al encabezar en la Constituyente la lucha contra la dotación de tierra en propiedad a los núcleos campesinos, expresó que el problema agrario de nuestro país no se solucionaba con la parcelación de los latifundios, sino por el contrario, dotando de hombres a las tierras, de contingentes campesinos a las explotaciones mecanizadas en manos de particulares. Este es el fondo que en las discusiones y debates se disimula con toda una literatura manoseada sobre el latifundio y minifundio, sobre las ventajas de la gran empresa mecanizada sobre la pequeña propiedad trabajada por su dueño. Asignar, garantizar a los acaparadores de los medios de producción, en este caso la tierra, la mano de obra explotable, al peón "rico y pila", es el objetivo del régimen latifundista-imperialista como lo veremos al analizar la Ley Agraria propuesta por la Fracción Acción Democrática de la Cámara de Diputados.

Se habla mucho de la contribución de los grandes hacendados y ganaderos al enriquecimiento nacional; de la necesidad de conservar sus unidades agropecuarias. Pero se silencia que esas haciendas y hatos las trabaja una población campesina que es la verdadera productora de la riqueza, a quien se le roba su esfuerzo y se le mantiene sumida en la miseria. La concentración de la tierra en pocas manos, latifundios o grandes empresas mecanizadas, asegura a sus propietarios el contingente de familias campesinas obligadas a vivir en esas tierras y por consiguiente, brazos humanos de los cuales extraer renta a través del canon de arrendamiento, de la mancomanía o del trabajo asalariado.

Para 1937, fecha de los Censos Agrícolas y Pecuarios, esa concentración llegaba a sus límites extremos. En el Estado Carabobo, por ejemplo, de las 433.000 hectáreas de su extensión territorial, estaban apropiadas 370.000 Hs. de tierras agrícolas por 1039 propietarios y de éstos, 12, ellos solos, poseían 198.784 Hs., 471 acaparaban 165.730 Hs. y los restantes 556 propietarios 4963 Hs. nada mas. Se preguntarán algunos y ¿qué hacen esos pocos propietarios con tanta tierra?. Ya lo vamos a ver: El estado Carabobo para 1936 tenía una población de 172.127 habitantes y de ellos, según el Censo de 1937, vivían en esas



tierras acaparadas 43.049, distribuidas así: 6.390 pisatarios, 123 medianeros y 2560 conuqueros con sus respectivas familias.

De las 270.000 Hs. apropiadas estaban cultivadas nada más que 57.458 Hs. permaneciendo incultas por consiguiente 312.000 Hs. Esas 57.458 estaban cultivadas así: 4.963 por sus 556 propietarios de menos de 25.Hs. (café, algodón, frutos menores), 18.008 arrendadas por los 9.073 pisatarios, medianeros, conuqueros (frutos menores, algodón) y las restantes 34.492, trabajadas por esos mismos pisatarios, medianeros, conuqueros como peones agrícolas y en beneficio de los 483 acaparadores (café 22.815 Hs., cacao 1418 Hs., caña 2.076 Hs., coco 2.103 y el resto frutos menores, etc).

Si comentamos esas cifras encontraremos que mientras 483 habitantes de los 172.127 del Estado poseían el 84% de la extensión territorial del Estado, 171.088 no poseían ninguna tierra; que los 9.073 pisatarios, medianeros, conuqueros con sus familias (43.049 habitantes), el 25% de la población, trabajaban las tierras de los 483 acaparadores bien como pisatarios, medianeros o conuqueros pagando \$403.740 de canon anual, ya como peones agrícolas explotados por medio del salario.

Se observará también que xixix mientras los 483 propietarios mantenían ociosas 312.000 Hs, los 9.073 campesinos se veían obligados a cultivar mediante arrendamiento nada más que 18.000 Hs., o sea un promedio de 2 Hs. por familia. Pero hay algo más, y es que esos 43.049 habitantes viven deseminados en las 364.514 Hs., expuestos a los desalijos, a las inclemencias de la naturaleza, produciendo apenas para sus exiguos sustentos y para pagar la renta al propietario.

No es del caso describir a ustedes el cuadro de miseria en que vive nuestra familia campesina. La clase obrera de nuestro país se nutre con tal contingente campesino, que bien pudiera afirmarse que un 70% de ella o bien abandonó los campos en la juventud o son hijos de campesinos. Y si esa composición social representa para las obreras el obstáculo de la falta de experiencia, la resistencia a la organización disciplinada, es sin embargo un factor activo en momentos en que el movimiento revolucionario exige la alianza más firme de la clase obrera con el campesinado. La clase obrera venezolana por sentir en su propia carne la tragedia que vive el campesino, conscientemente se dispondrá a prestar todo su apoyo a la realización de la Reforma Agraria, e incluso a colocarse a la cabeza del campesinado para llevarlo a la conquista de la tierra en propiedad. Sin embargo, es necesario insistir en algunos datos, cifras y comentarios, pues no es suficiente conocer por propia experiencia la miseria en que las clases poseedoras de los medios de producción mantienen sumidos a los trabajadores de las ciudades y de los campos. Es necesario conocer las causas y las formas en que se realiza la explotación, para en cada caso y en cada ocasión, saber precisar los fines inmediatos de la lucha y la organización apropiada para la defensa y la victoria.

Las cifras y datos que suministra el Censo del Estado Carabobo nos sirve de índice para apreciar el problema agrario en todo el país, no obstante ser esa una de las regiones en que la población urbana y semi-urbana, es decir la que vive en poblados mayores de 1.000 habitantes, es mayor que la rural, pues llega al 63%. En aquellas regiones en las cuales la población rural predomina sobre la urbana y semi-urbana, la explotación y miseria del campesinado es aún más profunda, tales como Mérida, Trujillo, Miranda etc., cuyos porcentajes de población rural son de 86%, 83% y 79% respectivamente. Es suficiente observar las cifras de esa concentración de la tierra, para comprender sin un mayor esfuerzo, que mientras ese acaparamiento en pocas manos de latifundistas continúa, la población campesina no solo estará imposibilitada para atender las exigencias de los mercados urbanos y a su propio abasto-

cimiento, sino para integrarse como población activa a la vida económica, social y política nacionales.

Sobre esa estructura agraria se cimentaron los regímenes de tiranía abierta tipo Gómez y la "legalizada" estilo López Contreras que aún pervive obstaculizando la instauración de formas democráticas de convivencia. Quien crea y sostenga que la población campesina disfruta de un clima político semejante al de la capital de la República y otros centros urbanos, voluntariamente se está engañando a sí mismo, si es que procede de buena fe, porque la discriminación de la población campesina, la miseria, el analfabetismo y el estado sanitario en que ella vive, consecuencias de ese acaparamiento de tierras, son factores que niegan la existencia de la democracia. No es democracia la participación con-cionada en elecciones cada cierto número de años. Democracia es la participación diaria y directa de la mayoría de la población en la administración de la cosa pública por medio de los órganos inmediatos de libre elección, los Concejos Municipales en cada municipio. Y como ellos no existen continúan administrando los Jefes Civiles y los Comisarios nombrados por los Gobernadores de los Estados, pero designados efectivamente por los grandes propietarios de tierra.

Por otra parte, ¿puede crecer y desarrollarse demográficamente, absorber contingentes inmigratorios, una nación cuya población campesina está obligada a vegetar bajo tales condiciones de discriminación y explotación? Haciendo abstracción del problema social, de la justicia que se debe al campesinado, la transformación del régimen de tenencia de la tierra tiene que plantearse como base para una sana política de población. La población discriminada tiene que ser concentrada en unidades económicas dotadas de tierra, para que en esas nuevas poblados o aldeas la asistencia social, la higiene, la escuela puedan impartir sus beneficios y el índice de crecimiento aumente satisfactoriamente.

Los defensores del latifundismo atribuyen a la explotación petrolera la escasa producción de artículos alimenticios, afirmando que los campesinos han abandonado los cultivos para emigrar a los campos petroleros ilusionados con los salarios que en ellos se pagan. Esa afirmación es falsa. Por una parte la absorción de mano de obra en esas explotaciones nunca ha llegado ni al 10% de la población activa en la producción agropecuario-forestal, la que se calcula en cerca de los 200.000 trabajadores. Mucho más importante es la emigración hacia los centros urbanos, especialmente la capital de la República, que han crecido a un ritmo acelerado a costa de la población campesina. Pero una y otra emigración interna con todo y haber influido en cierta manera en las relaciones de producción existentes en el campo, determinando aumento en los jornales, etc, no explicaría por su volumen la exigua producción nacional de alimentos. Cuanto más explicaría el de las regiones donde el éxodo sobrepasa al crecimiento vegetativo de la población. La producción de artículos alimenticios siempre ha sido deficitaria en nuestro país y siempre los hemos importado, incluso el maíz. Y la causa no ha sido otra que el acaparamiento de la tierra, la estructura latifundista y la orientación de los latifundistas a producir en plantaciones café y caña como frutos de exportación y caña para la elaboración de dulces y alcoholes dados los pingües rendimientos que siempre han obtenido con ese cultivo. La producción de frutos menores la han realizado desde la colonia exclusivamente los pisateros, molineros y conuqueros, quienes hostilizados y despojados por los dueños de la tierra, extorsionados por los especuladores y acaparadores de los pueblos, han sido compeli- dos a producir cada vez menos. Lo que preocupa a los hacendados de café y caña; a los sembradores de caña, etc., a los latifundistas y a sus voceros, no es pues que haya disminuido la producción de artículos alimenticios, sino que por la influencia de los salarios que se pagan en los centros urbanos y explotaciones petroleras, se hayan visto obliga- dos a aumentar los jornales y atender a prestaciones sociales, con la consiguiente rebaja de sus utilidades. El poco "pico y pala" de a real y medio, es el que ha "disminuido" y eso es lo que los preocupa.

No producimos artículos alimenticios para cubrir las necesidades de los mercados urbanos, pero lo que es peor aún, tampoco para el abastecimiento de la población campesina. Esa es la realidad y como consecuencia, el alto costo de la vida que se sufre agravado por la libertad de que disfrutaban los especuladores para subir los precios no en relación a lo que pagan a los productores, sino a la escasez que ellos mismos provocan ocultando los frutos. El campesinado urgido por las necesidades, ante el requerimiento de los acaparadores, vende incluso sus escasas reservas y la desnutrición en el campo es mayor que en los centros urbanos, porque a éstos llegan los artículos importados mientras que los campesinos, por carecer de recursos económicos no tienen con que comprarlos si es que al pueblo cercano llega algo. En los años de sus pensiones de importaciones, los centros urbanos se comieron todo cuanto el campesinado podía vender. Por ello, bajo el punto de vista colectivo nacional, no es el abastecimiento de los centros urbanos en artículos alimenticios lo que debe ser la preocupación central, sino el abastecimiento de la población campesina. Según el Censo de Población de 1941, de los 3.850.000 habitantes vivían en la capital de la República y capitales de estados 718.570 personas, subiendo esa cifra al 1.166.000 con la población de los pueblos mayores de 2.500 habitantes. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué hacen los 2.700.000 campesinos, aquellos que viven en los pequeños pueblos o diseminados por cerros y montañas? Esa es la base demográfica de nuestra población y sin embargo se la mantiene desprovista de toda clase de recursos. ¿Produce para su propio consumo y lo que vende es excedente o disminuye su consumo al vender su producción urgido por el pago de la renta del suelo, por la necesidad de adquirir medicinas, vestidos?.

Estas preguntas nos llevan a negar enfáticamente que el problema de Venezuela sea un problema de producción para abastecer a los centros urbanos. A afirmar enfáticamente que tiene que incorporarse a la producción a la gran masa campesina, a la mayoría de la población, para que se abastezca a sí misma primero y produzca excedentes para abastecer a los centros urbanos.

También por otra parte, esa es la solución para otros problemas, como el de población, el del aumento de la capacidad adquisitiva del campesinado de manera que disponga de recursos para adquirir los productos manufacturados y las industrias de las ciudades a su vez cuenten con mercados interiores necesarios para su incremento y desarrollo.

La masa campesina, la clase obrera y los sectores progresistas de las ciudades hace mucho que se pronunciaron por esa solución concretándola en la consigna: tierra para los campesinos, liquidación del latifundismo. En las guerras federales, como ya lo hemos dicho, la redistribución de las tierras era el objetivo económico que incorporó al campesinado a la lucha, porque en aquella época, como hoy, la miseria y la explotación que sufría tenían la misma causa: el acaparamiento de la tierra por un puñado de latifundistas.

Desde 1936 las fuerzas democráticas, especialmente la clase obrera, identificadas con las aspiraciones y necesidades de los campesinos, plantearon la entrega de la tierra a quienes la trabajan, la transformación de la estructura agraria, la liquidación de todas las pervivencias del régimen feudal, de los sistemas de arrendamiento, medianerías y en general, del pago de tributo a los dueños de la tierra en especie o en trabajo. La interrupción de las importaciones con motivo de la guerra mundial y la agudización en los centros urbanos de la crisis de abastecimiento en artículos alimenticios, situó el problema agrario en el primer plano de los problemas nacionales y el Ejecutivo se vio comprometido en 1944, a la elaboración de un proyecto de Ley que lo resolviera.

Todos recordamos las violentas polémicas que tuvieron lugar en torno

no a la finalidad y procedimientos que debían inspirar esa Ley. No vamos a entrar en detalles, pero es importante que precisemos las dos posiciones antagónicas que discutían:

La de las fuerzas democráticas consecuentes que se pronunciaban por una Reforma Agraria que liquidara la estructura latifundista de la economía agro-pecuaria, el acaparamiento de tierras, los sistemas de arrendamientos, medianerías etc., por medio de la dotación de tierra en propiedad a los campesinos y su incorporación a la vida económica, social y política nacionales; por medio de la ayuda técnica y crediticia del Estado y la concentración del campesinado diseminado en unidades económicas provistas de escuelas, sanidad etc. En resumen; una Reforma Agraria que emancipara al campesino de la explotación del gran propietario de tierra, convirtiéndolo en beneficiario directo del producto de su trabajo.

Las fuerzas reaccionarias (latifundistas, capitalistas o imperialistas) y la corte de intelectuales y demagogos a su servicio, esgrimiendo diversos sofismas, prorrugaban por el mantenimiento del campesinado como productor de riqueza en beneficio de los propietarios de tierras, mediante los sistemas de arrendamientos directos o indirectos, medianerías, trabajo asalariado; por mantener al campesinado en la miseria y sojuzgamiento y de esta manera, como proveedor de mano de obra barata para las haciendas de café, cacao, caña, para las explotaciones petroleras y las industrias, comercio y servicios públicos y domésticos en las ciudades. Abastecimiento de los centros urbanos por medio de grandes explotaciones mecanizadas en manos de trusts imperialistas, de particulares o del Estado y ayuda técnica y crediticia del Estado a los grandes y medianos propietarios.

Es claro, que en sus alegatos las fuerzas reaccionarias se cuidaban, como se cuidan hoy, de ocultar el fondo de sus objetivos. Incluso hacían y hacen esfuerzos por hacer creer que se oponen a que los campesinos sean dotados de tierra en propiedad, porque esas dotaciones perjudicarían a los campesinos mismos. Proclamaban y proclamaban que el problema de Venezuela no es el acaparamiento de tierras; pues tierra hay suficiente en toda la extensión del territorio; que el problema es de producción y se resuelve introduciendo la máquina en el campo, organizando grandes empresas, sin, por supuesto, referirse a quienes manejarán esas máquinas y cual será la suerte de la población campesina desplazada directa o indirectamente por esas máquinas. La dotación de tierras en propiedad a los campesinos, empujaría al latifundio por el minifundio, afirmaban y afirman con desfachato, asegurando que ello vendría a ser más catastrófica porque se destruirían las grandes unidades económicas existentes y se cubrirían al país de un mosaico de pequeñas propiedades que sumirían al campesinado en una mayor miseria.

Defendían y defienden su privilegio a poseer la tierra, incluso cuando se les asegura la indemnización, porque sobre la tierra está enclavada la población campesina productora de la renta. El propietario de un fundo cafetero, cacetero o de cañamolar se opone a la dotación de tierras aunque la Ley le asegure la inexpropiabilidad de su fundo, porque sabe que al ser dotados los campesinos de tierra, al ser convertidos en propietarios, no dispondrán de peones que lo siembre, liempien, recojan las cosechas o hagan la zafra. No les interesa la tierra, defienden la explotación del hombre que la trabaja para ellos como peoneros, medianeros o peones agrícolas.

Es esto el verdadero antagonismo de clases en el campo y el que nos explica el frente común de latifundistas, capitalistas o imperialistas contra la dotación de tierras en propiedad a los campesinos. La